

La columna de...

JUAN MARCOS HENRÍQUEZ,
DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Arauco sigue teniendo una pena

Este viernes 17 de mayo se cumplieron dos años del Estado de Excepción en forma ininterrumpida en la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bio Bio, de la región del Bio Bio. El control militarizado del libre tránsito y seguridad de las rutas, si bien busca disminuir la violencia, los ataques terroristas y el robo de madera, terminan afectando a la población en su conjunto, atenta contra la democracia, estigmatiza un territorio y finalmente no apunta a la raíz de los problemas y sus protagonistas.

Con algo de dudas (pero sobrepasado y sin plan B a la fracasada gira de diálogo de la ministra Siches), el gobierno optó inicialmente por un Estado de Excepción "acotado", en donde se buscaba la protección de rutas en el territorio en cuestión, excluyendo los caminos secundarios. Sin embargo, luego de la dura derrota en el plebiscito de septiembre de 2022, el Gobierno decidió modificar el decreto e incorporó la necesidad del resguardo de la vida, lo que implica que "las medidas adoptadas en función de este decreto deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, y la protección de la vida de las personas", una forma ambigua de decir que se ampliaban las restricciones a la garantía constitucional. Más militares, más control, más restricciones, y menos democracia. Esta situación al menos mí me genera vergüenza, tristeza y decepción.

Luego del brutal crimen de tres carabineros, la discusión sobre el Estado de Excepción en la macrozona sur, principalmente por la derecha, se ha centrado en la necesidad de ampliar la medida y utilizar el Estado de Sitio, acción que el gobierno se negó a implementar. En un acto netamente oportunista la derecha además exigió una ley de amnistía por las acciones de carabineros y FFAA en el estallido social, el aumento de la presencia, acción y atribuciones del personal militar en la macrozona sur, y mantener en el cargo al general Yáñez. Medidas sin nexo comunicante y que por lo demás no solucionan los problemas reales de la Araucanía.

En la Araucanía hoy por hoy se entremezclan las legítimas reivindicaciones culturales y territoriales del pueblo Mapuche con el crimen organizado, principalmente robo de madera y narcotráfico, a los cuales se suman grupos terroristas, de motivaciones varias. Históricamente en el mundo de izquierda hemos sido partidarios de la causa Mapuche, especialmente porque han sido saqueados, oprimidos y discriminados con la complicidad de múltiples gobiernos, contemplativos e irresolutos al momento de enfrentar la problemática; sin embargo, estamos al deber y muchas veces nuestros mandatarios se quedan sólo en lo testimonial y, como ahora, terminamos usando las viejas recetas para relacionarnos con el pueblo mapuche. La lucha reivindicativa se ha encontrado con constantes y periódicas decepciones lo que muchas veces ha derivado en formas de resistencia, con expresiones de violencia, a lo largo de nuestra historia. Que nuestros mandatarios puedan canalizar dentro del diálogo democrático las demandas del pueblo mapuche es sin duda un desafío pendiente y el camino inequívoco para solucionar los conflictos.

La zona de conflicto comprende a las provincias donde principalmente se siembran y cosechan recursos forestales. El robo de madera genera distintos tipos de conflictos. Por un lado, algunas comunidades tienen una postura de rechazo a las forestales con una motivación territorial, y mientras que, por otro, y en forma más masiva, existen bandas organizadas concertadas para el delito. Mientras no se combata a quien lucran del robo de madera, los empresarios de cuello y corbata, las expresiones violentas seguirán presentes. A este escenario se suma la presencia de bandas de narcotraficantes en el área que ha ido en aumento y se sospecha que financian grupos armados. Lo extenso y complejo del territorio, junto a una gran red de caminos rurales e interiores generan una gran oportunidad para el desarrollo del tráfico de drogas que debe ser combatido desde lo policial y tecnológico y no desde la militarización. De esta forma, bajo distintas motivaciones, grupos armados mantienen presencia en la Araucanía generando expresiones terroristas que el Estado debe identificar, perseguir y anular con las herramientas democráticas necesarias. Pero cada causa debe tener su propio tratamiento.